

Capturado indígena por la masacre de los awá

Jairo Miguel Pai Nastapuas, quien tenía orden de captura por secuestro y extorsión, fue retenido en Orito, Putumayo, cuando, al parecer, pretendía huir hacia el Ecuador. Será entregado a la Fiscalía.

Resumen de agencias

En las últimas horas de ayer agentes de la Policía capturaron a Jairo Miguel Pai Nastapuas, presunto responsable del asesinato de los doce indígenas awá ocurrido el 26 de este mes en el Departamento de Nariño.

Pai Nastapuas fue retenido en el barrio Las Colinas, casco urbano del municipio de Orito, Putumayo, por parte de un comando de 20 unidades de la Policía Nacional, atendiendo una orden de captura del Juzgado Primero Penal Municipal de San Andrés de Tumaco, por el delito de secuestro, emitida el pasado 27 de agosto.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía señalan al indígena como único responsable de la masacre cometida a la comunidad awá, a la que él también pertenece.

El coronel Orlando Polo Obispo, comandante de la Policía del Putumayo, reveló que el indígena se encontraba en Orito y que de allí pretendía huir hacia el Ecuador.

“Un comando especializado logró la aprehensión del señor Jairo Miguel Pai, quien tiene orden de captura vigente por el delito de secuestro y supuestamente está comprometido en la masacre de algunos indígenas awá en Nariño”, aseguró el alto oficial.

De acuerdo con el informe, Pai Nastapuas era un extorsionista que les cobraba considerables sumas de dinero a los propios miembros de su comunidad. Se cree que, al parecer, algunas de las víctimas se negaron a entregarles el dinero exigido y por eso habría optado por asesinarlas.

La investigación también señala que otros tres indígenas fueron secuestrados semanas antes del hecho y por su liberación Pai Nastapuas les cobraba \$10 millones. Pero tras ser liberados por el Ejército Nacional, se convirtieron en los prin-

Ubicación de la masacre



cipales testigos del caso.

Violencia contra los awá

Cuatro niños se encontraban entre los doce indígenas awá asesinados, al parecer, por Pai Nastapuas, en el resguardo El Rosario, ubicado en el kilómetro 89 de la vía que comunica a Tumaco con Pasto, capital de Nariño.

El relator de la ONU sobre la situación de los indígenas, James Anaya, condenó el crimen y lo calificó como un hecho “grave” para la comunidad indígena.

“Condeno rotundamente esos actos de barbarie y observo con dolor y extrema preocupación las consecuencias de esta nueva ola de asesinatos contra los pueblos indígenas del departamento de Nariño”, señaló.

El experto expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con la totalidad del pueblo awá.

“Espero que las autoridades colombianas investiguen los hechos, sancionen a los responsables y compensen el daño causado al pueblo awá de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, recalcó Anaya.

El relator especial se une así a la condena expresada ya por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Colombia hacia esos asesinatos perpetrados en el resguardo indígena de El Rosario.

Susan Lee, directora del Programa para las Américas de AI, en un comunicado difundido por la organización pro derechos humanos desde su sede en Londres, dijo que el pueblo indígena awá fue víctima del tercer asesinato masivo en menos de un año.

“Cuántos más tienen que morir antes de que el Gobierno actúe para proteger a estas comunidades”, dijo la directora.

El secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, señaló que una de las víctimas mortales, Tulia García, “denunció recientemente el asesinato de su esposo, Gonzalo Rodríguez, el pasado 23 de mayo, en la misma región”.

Con estos hechos, son ya 38 el número de awá asesinados en lo que va corrido del año en Nariño, según las organizaciones indígenas del departamento.

Inicialmente, cuando se descubrió la matanza, la ONG Human Rights Watch, cuyo director para las Américas es José Miguel Vivanco, afirmó mediante un comunicado que “los primeros informes indican que los responsables de esta masacre podrían ser miembros del Ejército, quienes habrían actuado con el propósito de eliminar e intimidar a testigos de atrocidades”, y advirtió que “el Gobierno debe asegurarse de que se realice una investigación efectiva de este aberrante crimen”.